

El giro progresista. Apuntes sobre los alcances y límites del neo-desarrollismo argentino.

Gastón Varesi.

Cita:

Gastón Varesi (2010). *El giro progresista. Apuntes sobre los alcances y límites del neo-desarrollismo argentino. VI Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-027/185>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eORb/rcX>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

El “giro progresista”. Apuntes sobre los alcances y límites del neo-desarrollismo argentino

Gastón Ángel Varesi

Conicet-IdIHCS, UNLP – FISyP - CLACSO, gastonvaresi@hotmail.com

1. Introducción

La presente ponencia propone analizar la dinámica político-económica reciente en el contexto de la crisis mundial, observando las disputas entre distintos proyectos así como sus asideros políticos y sus vinculaciones a las fracciones de clase.

En primer lugar, partimos de un ejercicio de periodización y caracterización del modelo de acumulación actual. Luego, se sostiene que a partir del “conflicto del campo” y la derrota electoral sufrida por el oficialismo marcaron el fin del momento hegemónico alcanzado hacia 2006. En este contexto el kirchnerismo comienza a impulsar un “giro progresista”.

La profundización de la crisis mundial constituye el marco de acción, en el que se despliegan tanto un plan anti-crisis de corte neo-desarrollista como un conjunto de políticas progresivas que confrontan con distintas fracciones y agentes al interior de la clase dominante, procurando preservar alianzas dentro del bloque de poder así como dentro de las clases subalternas. En este punto, nos detendremos a reflexionar en torno a la estatización de las AFJP, la Ley de Medios y la Asignación Universal por Hijo, observando algunas discusiones acerca de sus implicancias y alcances. También analizaremos los rasgos de la dinámica conflictiva actual. Finalmente, evaluaremos los alcances y límites que se manifiestan en el despliegue de la estrategia oficial y su proyecto neo-desarrollista.

2. Modelo de acumulación post-convertibilidad: periodización y características

Como sostuvimos en la declaración del Grupo de Trabajo sobre Economía Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales de CLACSO, entendemos que en América Latina se expresan actualmente tres proyectos político-económicos de gobierno:

“En primer lugar, se encuentran las pretensiones de las clases dominantes y la derecha latinoamericana de utilizar la crisis para imponer un nuevo ciclo de reformas neoliberales, que permita profundizar la transnacionalización y la desnacionalización de las economías, imponer un régimen de incentivos extremos al gran capital, y proseguir con el proceso de redistribución regresiva del ingresos, en detrimento de los fondos de consumo de los trabajadores. Estas pretensiones, se asocian a la estrategia geopolítica de Estados Unidos para América Latina, orientada a recuperar las posiciones perdidas durante la última década, recurriendo incluso a la mayor militarización de la región, tal y como lo demuestra el acuerdo para el uso de siete bases militares de Colombia por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Ese es el razonamiento que explica el golpe militar en Honduras que condenamos enérgicamente. En segundo lugar, se encuentran los proyectos políticos de los gobiernos que sin pretender producir en lo sustancial una

ruptura explícita con las políticas neoliberales, imponen cambios de acento y nuevos énfasis tanto en materia social como en políticas de producción. Se trata de los proyectos *posneoliberales* que se inscriben dentro de una línea neodesarrollista, confían en las posibilidades del capitalismo productivo y nacional, con altos incentivos a la inversión extranjera, y sin compromisos a fondo con políticas redistributivas. En tercer lugar, se encuentran los proyectos político económicos de los gobiernos basados en una importante movilización social y popular, con una voluntad expresa de cambio, a favor de una ruptura con las políticas hasta ahora imperantes, en defensa de un proyecto de soberanía, autodeterminación, y de nuevo entendimiento de la economía y de la integración de las regiones y los pueblos. En algunos de estos países, se ha anunciado el emprendimiento de transformaciones hacia el socialismo, y se han adelantado importantes medidas en ese sentido.” (GT Economía Mundial, 2009)

Estos distintos proyectos generan, a través de sus políticas, modificaciones en el proceso de acumulación de capital, contorneado a su vez por los cambios en las relaciones de fuerzas entre las fracciones de clase y las características de las variables económico-estructurales de más largo plazo.

Para el caso argentino, entendemos que el modelo de acumulación actual tiene su origen en el contexto de crisis integral que marcó el agotamiento del modelo de la convertibilidad (1991-2001), el cual encarnó la forma más acabada de aplicación de las reformas neoliberales como profundización de la ofensiva del capital efectivizada a partir del golpe de Estado de 1976. El modelo post-convertibilidad comienza a configurarse a partir de *seis políticas fundacionales*: 1) la devaluación, 2) la implementación de retenciones a la exportación, 3) la pesificación asimétrica de deuda privada, 4) el “salvataje” al capital financiero, 5) el *default*, 6) el congelamiento y renegociación de tarifas. Estas políticas fueron dando lugar a un nuevo modelo de acumulación que, presentando rupturas y continuidades respecto del modelo de los años 90, se vincularon a cambios particulares en la correlación de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y beneficios, dando origen una experiencia neo-desarrollista.

La *devaluación* generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que permitió a los agentes del capital productivo la dinamización de las exportaciones, y a través de su gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tributaria, dio lugar a la recomposición de las cuentas públicas. Esta vía de recuperación económica ha llevado un aumento de la producción manufacturera, incluyendo un fenómeno periférico de sustitución de importaciones producto de la protección que generó la modificación del tipo de cambio al aumentar el costo de las importaciones. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real, y junto al congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los precios internacionales favorables y el nuevo tipo de cambio, permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica.

La estructura exportadora se basa principalmente en la explotación y procesamiento de recursos naturales, marcando la consolidación de una estructura productiva regresiva. Asimismo, posee un fuerte componente de bienes exportados que son al mismo tiempo productos de consumo masivo de la población, repercutiendo negativamente en el nivel de inflación y socavando el salario real, debido a la tendencia del empresariado a “dolarizar” el precio de estos productos para equipararlos con los precios netos de exportación. Es ante esta circunstancia que las *retenciones* procuran, por un lado, limitar la inflación, desdoblando precios internos y externos, y por otro, constituir una herramienta de recaudación fiscal.

También debemos destacar que continúa un *perfil altamente concentrado* del sector exportador, en el que sólo las veinticinco primeras empresas explican el 62,9 % del valor total exportado (Schorr y Wainer, 2005). Además, las principales empresas exportadoras (Repsol, Bunge Arg., Cargill, Aceitera Gral. Deheza, etc.) constituyen, al mismo tiempo, las principales empresas de la estructura económica en su conjunto. El dinamismo y concentración de estos actores nos permiten pensar en la configuración de una *fracción productivo-exportadora* del capital como núcleo dinámico del modelo post-convertibilidad. El impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que, junto al superávit fiscal, favorecido vía retenciones a las exportaciones, configuran los *dos pilares de estabilidad* del modelo.

Estos agentes también fueron beneficiados por la *pesificación asimétrica* de deuda privada, que fue el mecanismo implementado durante el gobierno de Duhalde para “socializar” y licuar las deudas de las empresas industriales, el sector agropecuario y las privatizadas¹. En este contexto, el gobierno dispone un *plan de “salvataje” al capital financiero* destinado a compensar a los capitales de dicho sector a través de la emisión de nueva deuda pública por un monto total de US\$ 20.379 millones. El capital financiero se encontraba afectado por el *default* en tanto era poseedor de una parte importante de los bonos. El canje desarrollado en 2005, si bien posee una significativa quita y mejora sustancial de los indicadores de deuda/PBI y deuda/exportaciones, muestra también una férrea voluntad de pago por parte del Estado, destinando al pago de deuda partidas que superan el gasto social en salud, educación y vivienda, con el fin de afrontar un arduo calendario de pagos cercano a los US\$ 20.000 millones anuales².

Otra de las políticas fundacionales señaladas es el congelamiento y rediscusión tarifaria

¹ La pesificación asimétrica implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a \$1,40 por cada US\$1, mientras que los deudores con la banca local verían pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US\$1. Cuando el lobby empresarial logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (US\$ 100.000), ésta se convirtió en un mecanismo de licuación de las deudas del capital.

² Debe observarse que la deuda se financia a través de una estructura impositiva sumamente regresiva.

que afectó a las privatizadas. Esta política se complejizó en el gobierno de N. Kirchner a través del desarrollo de una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales: renegociación, reestatización y creación de empresas estatales, persiguiendo tres objetivos: 1) desmantelar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevaron al CIADI; 2) mantener el nuevo esquema de precios relativos favorables a la producción de bienes transables; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas. Los gobiernos post-convertibilidad, si bien han asumido una postura de mayor firmeza frente a las privatizadas, no han desplegado un proyecto de recuperación de los recursos estratégicos. Asimismo, las reestatizaciones avanzaron primordialmente sobre los casos más escandalosos de la gestión privada. El cambio en los precios relativos favorables a la producción de bienes transables evidencia modificaciones en las relaciones de fuerzas en detrimento de las empresas de servicios, quienes conformaban parte del núcleo “ganador” de los años 90, aunque han sido parcialmente compensadas por una política de subsidios (Varesi, 2009a).

Habiendo realizado un breve recorrido por las políticas fundacionales del modelo post-convertibilidad, se hace imprescindible establecer su *periodización*. Si tenemos en cuenta que las principales políticas inaugurales del modelo serían perfiladas a partir de la *Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario* n° 25561 promulgada el 6 de enero de 2002, será entonces este año el punto de partida clave en la gestación del modelo actual.

El punto de partida es fundamental para analizar los límites y alcance del neodesarrollismo. Esto se debe a que la evaluación es muy diferente según se considera 2002 o 2003 como año de inicio, ya que en 2002 no sólo se gestan estas políticas que instituyen de modo relevante cambios en el proceso de acumulación y comienzan a plantear las regularidades que nos permitan hablar de un *modelo*, sino que 2002 marca también el punto de mayor deterioro histórico de los indicadores sociales, con dramáticas consecuencias en las condiciones de vida de las clases subalternas. En diversos trabajos se señala el punto de partida del actual modelo en 2003: partiendo de este punto y excluyendo las implicancias de 2002, se habla de un modelo basado en la industria y el trabajo, progresivamente distributivo. Todos los indicadores muestran mejora desde este punto, y efectivamente existe un cambio a nivel político, la asunción de Néstor Kirchner y el desarrollo del kirchnerismo como una corriente (y cultura) política particular dentro del peronismo. Pero en términos de modelo de acumulación, no podemos dejar de notar que es en 2002 cuando se marcan las fundamentales rupturas tanto en el nuevo tipo de cambio competitivo, favorable al crecimiento de las exportaciones y con mayores restricciones a los productos importados, como en el nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables, se gesta el inicio del proceso inflacionario, se opera la licuación de deuda

privada a través de la pesificación asimétrica, se había establecido previamente el *default* y se realiza el “salvataje” al capital financiero, que junto con los subsidios comenzaron gestar un sistema de transferencias de recursos que buscó estabilizar las relaciones de clases en el marco de nuevas relaciones de fuerzas entre sus fracciones. Y es también a partir de estas políticas que en 2002 se produce una reducción sustantiva del salario real y un retroceso de los trabajadores en la distribución del ingreso. Desde nuestro punto de vista, es esta contracción una de las claves del crecimiento económico posterior, ya que impulsa altas tasas de rentabilidad para el capital. Si 2002 es el inicio del modelo actual, las políticas más progresivas gestadas desde 2003 vienen a recomponer la debacle ocasionadas por las políticas que ponen en marcha el modelo, y de este modo representan recuperaciones de los niveles de vida de las clases subalternas, con presiones empresariales que buscan limitar la participación de los trabajadores y sus salarios reales a niveles de la década de los 90, en el auge del proyecto neoliberal.

Ahora bien, es cierto que a partir del gobierno de Kirchner se han desplegado *cuatro mecanismos* para detener la caída del salario real e impulsar distintos grados de recomposición del ingreso (Varesi, 2009b). 1) El aumento del *salario mínimo*, que se dio a partir de la convocatoria al “Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil”, revalorizando las mediaciones sindicales y patronales, y que sería elevado anualmente. 2) Los *convenios colectivos* se multiplicaron desde la asunción de Kirchner permitiendo importantes recuperaciones del salario real, aunque alcanzando sólo entre 15 y el 20% de la fuerza laboral. 3) Las *jubilaciones mínimas* fueron elevadas desde los \$200 mensuales a los \$596 en agosto de 2007, aunque a pesar de los aumentos, ésta quedó muy por debajo de la línea de pobreza, establecida en \$ 923 (julio 2007). Además se extendió la jubilación mínima aproximadamente a 1.800.000 jubilados que se encontraban por fuera del régimen. 4) El gobierno impulsó *acuerdo de precios* con los principales productores y comercializadores para intentar contener la inflación. Las retenciones a las exportaciones actuaron también en el mismo sentido. También ha negociado la adjudicación de subsidios a fracciones del capital concentrado para impedir el aumento de precios. Aún así ya desde 2007 volvería a desatarse una fuerte presión inflacionaria.

Estas políticas han tenido un efecto positivo, pero limitado y dispar. El *efecto positivo* se destaca en el aumento de los ingresos reales y mejora de los indicadores sociales respecto del momento de su aplicación, elevando sobre todo los “pisos” de ingresos. Pero contienen un *efecto limitado* relacionado a que, si bien se incrementan los salarios reales, la participación de los asalariados en la participación de los asalariados en el PBI se ubicó en 2007 al 28%, aún por debajo del 31% que alcanzaba en 2001, lo que parece mostrar un “techo” que no modifica la

distribución³. El impacto de las distintas medidas distributivas ha sido *dispar* en lo particular, ya que dentro de los asalariados puede percibirse una fractura en dos sentidos: por un lado debido a que en la estructura de ingresos de los trabajadores formales “el 11,9% de ellos concentran el 32,5% de la masa salarial total, mientras el 61,1% de los trabajadores formales perciben el 30,6% de la misma” (Lozano, 2008:9) y por otro lado, porque pueden observarse evoluciones distintas entre los trabajadores registrados del sector privado, cuyos salarios reales en 2007 muestran mejoras respecto de 2001, los trabajadores no registrados con pérdidas del 13,3% y los estatales que en 2007 obtuvieron un salario real un 21,7% por debajo de 2001 (Lozano, 2008).

Observamos, en síntesis, que en el periodo 2002-2007 se configura un nuevo modelo que procura saldar la crisis de 2001, en el que el *Estado emerge como un actor fundamental* en la movilización de recursos a través de diversos mecanismos de transferencias, que si bien se enlazan con cambios en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, busca gestar un nuevo momento conciliatorio en la administración de la fase expansiva del ciclo económico. Emerge entonces un nuevo cuadro de relaciones de fuerzas con una fracción productivo-exportadora como principal beneficiaria de la post-convertibilidad, y el capital financiero y las empresas de servicios privatizadas perdiendo posiciones relativas, aunque siendo compensadas por distintos mecanismos. El modelo se legitima entonces a través de una fuerte reducción del desempleo (de 23,3% en 2002 a 7,3% en 2007), ligada al perfil más productivo del modelo, y acompañada por las mejoras en las condiciones de vida de las clases subalternas a partir de las políticas de ingreso desplegadas desde 2003. El conjunto de políticas mencionadas lograron estabilizar las fracciones de clase, tanto dominantes como subalternas, en el marco de nuevas relaciones de fuerzas, alcanzando un fuerte desarrollo hegemónico hacia 2006.

3. Dinámica política y política económica en contexto de crisis.

El 2008 constituyó un año de cambios importantes tanto a nivel político como económico. El inicio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sería atravesado por fuertes conflictos políticos que fueron detonados a partir de la confrontación de una medida particular de política económica ligada al cambio del régimen de retenciones pero evidenciando la conformación de un nuevo alineamiento dentro de la clase dominante que sale a disputar la hegemonía hasta entonces estabilizada. Esta crisis de hegemonía se articula con el contexto de la crisis mundial que comienza a mostrar sus primeros síntomas. Analizaremos cómo ambas crisis son confrontadas desde el oficialismo con diversas políticas activas y sus implicancias.

³ Esto se explica porque si bien el salario real promedio se acerca en 2007 al de 2001, la productividad laboral es mayor, generando valor apropiado en forma de ganancia por las clases dominantes

3.1. Conflicto del campo y derrota electoral.

El conflicto que estalla con la “resolución 125” que establecía tanto un aumento en las retenciones a determinados productos del agro, que habían alcanzado un record histórico en sus precios, así como un régimen móvil de las mismas ligado al precio internacional, establece un punto de inflexión en diversas dimensiones.

A nivel de las fracciones de clase, se produce la particularidad que los agentes económicos y sus representaciones corporativas que salieron a enfrentar al gobierno constituían parte de la principal fracción beneficiaria del modelo, la fracción productivo-exportadora del capital. Este fenómeno sólo puede ser explicado atendiendo a las transformaciones de más largo plazo vinculadas a los circuitos productivos del agro, ligados a la “revolución verde” y el proceso de agriculturización (devenido en creciente sojización) y el impacto que dichos procesos tuvieron sobre los agentes económicos. A nivel estructural venía gestándose en el agro un *triple proceso de concentración*: a) concentración estructural de la tierra, donde sólo el 4,2% de las explotaciones agropecuarias poseen el 62,8% de las Ha totales; b) concentración del capital presente tanto en el desdoblamiento creciente entre propietarios (devenidos en rentistas) y contratistas (propietarios de tierra o no), a la que se suma la concentración del capital en los eslabones finales del proceso productivo en tanto sólo seis empresas controlan el 80% de la industrialización de la soja; c) concentración de la organización y gestión del proceso productivo mediante grandes empresas agropecuarias-financieras que utilizan la estrategia de armar *pools* de siembra (Varesi 2010). En simultáneo, la creciente demanda de productos agrícolas explicada en parte por el creciente consumo de China y la mayor demanda mundial de agroalimentos impulsaron el incremento del precio de los principales cultivos, primordialmente de la soja, habilitando ganancias y rentas extraordinarias.

La creciente concentración y el claro predominio de los propietarios y rentistas en el proceso productivo fueron clave en el fortalecimiento de dichos agentes que salieron a disputar al Estado las retenciones: uno de los mecanismos fundamentales utilizados para limitar la inflación y transferir ingresos en la post-convertibilidad hacia el pago de la deuda, subsidios a las privatizadas y transferencias para apuntalar los ingresos mínimos de las clases subalternas. Es esta dinámica la que se encontró detrás del denominado “conflicto del campo” donde, a pesar de multiplicar su rentabilidad incluso con el nuevo esquema de retenciones, los agentes ligados al circuito sojero se lanzaron para disputar mayores márgenes de ganancias y rentas extraordinarias.

Es en este enfrentamiento donde comenzará a visualizarse la articulación de un alineamiento que, desde el interior de la clase dominante se conformará como adversario del oficialismo. Cada

vez de forma más clara comienzan a aparecer articulados un espectro que abraza a los agentes y corporaciones del agro, la derecha y centro-derecha política y los principales medios de comunicación. Este alineamiento gesta una ofensiva que no sólo logra derrotar en el Congreso la medida de retenciones móviles, sino que también se mostrará triunfal en las elecciones legislativas de dicho año, con la relevancia de derrotar en la provincia de Buenos Aires al mismísimo Néstor Kirchner en fórmula con el gobernador Scioli. Se conforma así un alineamiento que encarna las pretensiones de las clases dominantes de recuperar el paradigma neoliberal como proyecto de gobierno.

El oficialismo había dilapidado el consenso hasta entonces alcanzado en un conflicto que había fortalecido y ayudado a articular un adversario con claros ribetes de derecha, que reinstalaban debates con connotaciones culturales de cuño neoliberal, en torno la libertad de mercado y la “libertad de ganancia” como valores. El escenario post-electoral era de tal incertidumbre que hasta comenzó a hablarse de una posible dimisión de la presidenta. Se instituye aquí un vértice tanto a nivel político como económico. En términos políticos se pasará de la búsqueda de consensos, que habían sido desarrollados bajo la estrategia de “transversalidad” y luego de “concertación”, al enfrentamiento abierto con los adversarios. En términos económicos, si bien no se presentan quiebres fundamentales que permitan entrever un cambio a nivel de modelo de acumulación, sí se observarán medidas fuertes que inciden en las relaciones de fuerza entre las clases sociales, buscando fortalecer la participación de agentes productivos industriales y de las clases subalternas en el alineamiento oficial.

3.2. Crisis mundial y políticas anti-crisis

Es en este marco que comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis mundial, que alcanzó a Argentina en una etapa que mostraba cinco años de crecimiento a tasas cercanas al 9% anual. Esta crisis cuenta con la singularidad de que se gestó y propagó primero en los países centrales expandiéndose luego a la periferia. En lo que respecta a la Argentina podemos visualizar dos mecanismos de propagación principales: el impacto en materia de comercio exterior y el ajuste en los planes de producción de las empresas.

Respecto del comercio exterior puede constatarse el impacto de la caída del comercio mundial tanto por la caída de las cantidades como de los precios de las exportaciones (principalmente productos primarios y MOI) cortando, en 2008, el crecimiento continuo de las exportaciones locales desde la devaluación. El mantenimiento de la reestructuración productiva regresiva y la apertura económica tornan a la economía argentina subordinada al precio internacional de los *commodities*, marcando el papel dependiente de su inserción internacional.

Los precios de las materias primas que habían alcanzado hacia mediados de 2008 precios históricos, se derrumbaron en el segundo semestre de dicho año (caída del 50% en el precio del petróleo y del 30% en las materias primas restantes) convirtiéndose así en uno de los canales más importantes de propagación de la crisis (Klitenik 2010). Como mencionamos, existe una estrecha relación entre el superávit comercial y el superávit fiscal, que conforman los dos pilares de estabilidad del modelo sobre los que se montan los mecanismos de transferencias de ingresos, por lo que la contracción del superávit comercial podría provocar tanto la restricción de divisas así como un debilitamiento de las cuentas fiscales. Un dato significativo en ese sentido es la disminución del *superávit comercial*, que en enero de 2009 “se redujo un 27% respecto al año anterior, por efecto de la caída del volumen de exportaciones (-35,8%), pero que fue compensada por una mayor caída del volumen de importaciones (-38,4%)” (Lozano, 2009:6). Esta situación comienza a revertirse desde abril de 2009, acompañando la variación del precio de los *commodities*.

El segundo mecanismo refiere al *ajuste de planes productivos* por parte de las empresas. Este factor podría afectar en varios sentidos: una caída en la inversión y el incremento de fuga de capitales, que, junto al deterioro del comercio exterior, conllevarían a la desaceleración del crecimiento y retracción industrial, y al aumento del desempleo.

La *Inversión Bruta Interna Fija* (IBIF) también se contrae, llegando en el I trimestre de 2009 al pico más fuerte de reducción de la variación anual desde 2002: un -14,2%. Más allá de la coyuntura, podemos observar una tendencia de más largo plazo de desaceleración de la IBIF, ya que su variación interanual se reduce incesantemente desde 2003, mostrando una tendencia a la “huelga de inversiones” que no emerge en la crisis sino que se profundiza con esta. Si el modelo post-convertibilidad apareció como una salida hegemónica para el capital en su conjunto, la caída de las inversiones podría expresar una merma paulatina de su adhesión al mismo. Esta situación también puede visualizarse en el crecimiento de la *fuga de capitales* que alcanzó su triplicación en 2008.

Este conjunto de factores acarreó una creciente *desaceleración económica* plasmada en la variación anual del PBI, que, ubicándose en el III trimestre de 2008 al 6,9%, cayó hasta el 2% en el I trim. de 2009. Se observa una reducción de la producción de bienes, que tiene su correlato en la *industria*, que inició un periodo de contracción⁴. Esto, sumado a la fuerte desaceleración de la construcción impactó en el empleo: ya en 2007 se frena la creación de nuevos puestos de trabajo,

⁴ En este marco, “Las industrias más afectadas son particularmente las que explicaron y motorizaron el crecimiento de la industria en los años precedentes. Es el caso de la Industria Automotriz, la Industria Textil y la Industria Metal Mecánica Básica” (FISyP 2009:6).

cortando una tendencia ininterrumpida desde 2003, y en 2008 comienza a crecer el desempleo, alcanzando el 8,8% en 2009.

En este contexto, el gobierno comienza a desarrollar un extenso *plan anti-crisis* que, a nuestro entender remarcó el carácter neo-desarrollista del proyecto oficial con sus incidencias a nivel del modelo de acumulación. De este modo, se lanzó un amplio abanico de medidas encaminadas a mantener los pilares de estabilidad del modelo (superávit comercial y fiscal) y suavizar el impacto de la crisis mundial sobre el PBI y el empleo.

En primer lugar, debemos mencionar un momento fundamental con incidencia en las relaciones de fuerzas entre fracciones de clase, así como de adquisición de recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del plan anti-crisis. Este momento fue la *estatización de las AFJP*, administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones, ligadas los conglomerados financieros. Ante el advenimiento de la crisis, los fondos jubilatorios invertidos por las AFJP comenzaron padecer una fuerte depreciación y, con este argumento, el gobierno realizó su estatización. Con esta acción, el Estado transfirió fondos acumulados por \$97 mil millones y recibe aportes anuales calculados entre \$12 y 15 mil millones. Uno de los objetivos de esta medida respondió a fortalecer las cuentas fiscales, tanto para impulsar el plan anti-crisis como para poder afrontar los pagos de la deuda pública que para 2009 aumentaban a US\$20.000 millones. Además, las AFJP eran importantes acreedores del Estado, ya que más del 50% de los fondos de las AFJP estaban invertidos en bonos de la deuda pública. Esta acción estatal fue cardinal también para mantener el superávit fiscal, uno de los pilares de sustentación del modelo, ya que en enero de 2009 el superávit primario se redujo en un 40% respecto del mismo mes del año anterior, y sin el aporte adicional de los fondos jubilatorios transferidos al Estado hubiera resultado deficitario. Además, buena parte de las medidas anti crisis serían financiadas a partir de los fondos manejados por el ANSES, el organismo estatal que controla los fondos del sistema de jubilaciones y pensiones. Debemos enfatizar que esta acción también marca un nuevo cambio en la correlación de fuerzas, en tanto los conglomerados financieros serían expropiados de un millonario negocio que habían usufructuado desde la ola de privatizaciones de los años 90.

El plan oficial para enfrentar el contexto de crisis mundial tuvo diversos elementos. En primer lugar, se apeló a la *política cambiaria* con el fin de dar respuesta a la creciente presión de las corporaciones industriales por incrementar la devaluación. El gobierno, entonces, pondría fin a la relativa estabilidad cambiaria en términos nominales, que había rondado los \$3 por dólar, devaluando gradualmente hasta los \$3,95 en 2010. Con esta acción procuró mantener la competitividad internacional del tipo de cambio, para contrarrestar el efecto negativo que la crisis mundial estaba ejerciendo sobre las exportaciones y preservar la producción local frente a

los depreciados productos de las economías centrales. Asimismo se implementaron *medidas comerciales*, tales como derechos *anti-dumping*, licencias no automáticas e incremento de los valores de referencia a la importación, tendientes a proteger la producción local en áreas sensibles intensivas en trabajo (Aruguete y Selva 2009).

El gobierno también desplegó otra serie de medidas orientadas a dar respuestas a las demandas del capital productivo. Podemos mencionar las transferencias indirectas, a través de exenciones y rebajas impositivas. Este es el caso de la Ley de Promoción de Inversiones de 2008 que promueve la inversión en bienes de capital e infraestructura, reduciendo aranceles de importación y otorgando beneficios impositivos, involucrando fondos por \$1.200 millones anuales. Aunque su mayoritaria derivación a los principales grupos económicos profundiza la concentración y financia públicamente inversiones que hubieran podido realizarse por las propias empresas (Ortiz y Schorr, 2009).⁵

Otro elemento fundamental del plan anti-crisis que marca su carácter neo-desarrollista ha sido la derivación de recursos hacia la *obra pública*. El gobierno creó un masivo plan de obra pública por \$111.000 millones a ejecutarse entre 2009 y 2011, con el fin de generar empleo y hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico. El Plan Obras para Todos los Argentinos prevé la distribución de los fondos obras de infraestructura vial, mejoramiento del hábitat social, energía, minería y transporte público.

También encontramos el *blanqueo de capitales*, que procuró contrarrestar la presión de la fuga de capitales, buscando la declaración de los fondos de los residentes locales en el exterior y su inversión en la economía argentina a través de descuentos tributarios. Esta medida logró el blanqueo de \$18.113 millones, involucrando a más de 35 mil contribuyentes.

Otra medida consistió en una amplia moratoria impositiva que condona parte de la deuda a pagar y suspende las acciones penales ya iniciadas contra los evasores. También promueve el registro de los trabajadores y la regularización de los aportes jubilatorios.

Una acción que, si bien fue inaugurada antes de la crisis, se profundizó durante la misma, y que procura mantener el nivel de empleo a través del subsidio al capital, es el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). El programa otorga a empresas en crisis un subsidio por trabajador hasta \$ 600 mensuales para completar salario, y cuadruplicó sus fondos a inicios de 2009, alcanzando los \$ 197.000 millones.

Entrando ahora en las medidas anti-crisis orientadas explícitamente a los trabajadores,

⁵ El plan anti-crisis contiene también un fondo de \$13.200 millones para incentivo de consumo de sectores de ingresos medios y altos a través de créditos para la compra de autos, utilitarios y camiones, y electrodomésticos, así como para pre-financiar exportaciones y capital de trabajo.

debemos destacar el aumento del salario mínimo que pasó escalonadamente de \$1240 a \$1500 en enero de 2010. Finalmente, podemos señalar el paquete de medidas sociales que incluyeron un conjunto de iniciativas tales como aumentos en el presupuesto del Plan Alimentario Nacional, un incremento del 50% en el adicional por hijo y la creación de 1000 cooperativas, cuyo impacto en el empleo se estima en 300 mil puestos, entre otras. Estas medidas implicarían un aumento de \$2.000 millones en las partidas destinadas a programas sociales. Si bien en un primer momento sorprendía la escasa cantidad de recursos derivados hacia las clases subalternas, siendo claramente visibles las transferencias hacia el capital productivo, a fines de 2009 se lanzaría un plan social clave en la conformación del “giro progresista”: la Asignación Universal Por Hijo para la Protección Social (AUH).

3.3. Asignación Universal por Hijo. Alcances y debates.

La Asignación Universal por Hijo surgió a partir del decreto 1602/09 en octubre de 2009 con el fin de proveer cobertura a la niñez a través de un ingreso mínimo a los niños que se encontraban desprovistos del mismo. De este modo se estipuló orientar la asignación hacia los menores de 18 años cuyos padres estén desocupados o trabajen en el sector informal y posean un ingreso menor al salario mínimo.

Entendemos que esta medida abre un debate por dos frentes: por un lado acerca de la naturaleza de las acciones estatales necesarias para transformar las condiciones de vida de las clases subalternas, que viene cobrando forma a través del debate en torno a la “universalidad”; y por otro lado, nos convoca a evaluar el impacto efectivo de dicha política.

Con respecto al primer punto, consideramos que existe una confusión en los usos de los términos “universalidad” y “focalización”, donde el sentido común progresista tiende a ubicar al primero como atributo de bienestar social y al segundo como política reaccionaria ligada al paradigma neoliberal. Creemos que es necesario atender a los usos de ambos conceptos según tengan estos por objeto al derecho en cuestión o a la política que procura garantizar dicho derecho. Si bien los derechos son universales, las políticas para alcanzar la universalidad de dicho derecho, en condiciones de desigualdad real, no pueden ser en este momento sino focalizadas: porque la universalidad en una política (por ej. subsidios a “todos” los niños) formaliza una igualdad de derecho que encubre una desigualdad de hecho. Para re-distribuir el ingreso no pueden pensarse políticas que afecten igualmente a todos los sectores sociales: en tanto la distinción económica fundamental en las sociedades capitalistas sigue siendo la desigualdad de clase, no puede cobijarse bajo la “universalidad” del mismo modo a agentes provenientes de las clases dominantes como de las clases subalternas, presuponiendo una

homologación que no es sino ficticia. Re-distribuir implica afectar recursos de los sectores minoritarios que los concentran para transferirlos hacia los sectores mayoritarios desprovistos de los mismos y principalmente a quienes se encuentran en condiciones de pobreza e indigencia. Es por esto que para lograr efectivamente la universalidad del derecho, la política tiene que hacer foco en estos últimos agentes. Por el contrario, observamos en algunas posiciones y proyectos que la AUH debe alcanzar su efectiva “universalidad”, criticando que ésta alcance sólo a algunos agentes sociales... la cuestión sigue siendo que si bien los niños y jóvenes continúan siendo grupos socialmente vulnerables, esto lo es sólo vinculado a su clivaje de clase. En este sentido, el debate “universalidad/focalización” pierde su lugar frente a otro más relevante: la distinción entre dominantes/dominados, y la focalización o universalidad se convierten en meras tácticas dentro del plano de la lucha de clases.

Una muestra clara de este enfoque reduccionista puede verse en Lozano y Raffo (2010), cuando sostienen que:

“Pese a su denominación la nueva prestación no es universal sino focalizada. Una transferencia de ingresos en base a la niñez y a la discapacidad de carácter universal, supone que ésta se efectúe para todo el universo sin la necesidad de que los progenitores realicen ninguna prueba de ingresos ni demuestren ninguna situación laboral en particular, en la medida en que la asignación se entiende como un derecho intrínseco a sus titulares, por lo cual es incondicional y no puede ser objeto de sanción y/o descuentos.”(Lozano y Raffo 2010:7)

Dicho trabajo reincide insistente en la necesidad de una política “universal” criticando bajo el lema “no todos los pibes valen lo mismo: los distintos montos del sistema” que se establezcan distintos montos de asignaciones según remuneración y zona, cuando resulta claro que las remuneraciones y zonas marcan distinciones de hecho que deben ser valoradas a la hora de redistribuir recursos. En este punto acordamos con el trabajo del Ceil-piette cuando sostiene que “el plan no implica estipular un ingreso universal sino más bien a universalizar un ingreso” (Ceil-piette, 2009:6) apuntando a igualar lo que es hoy desigual.

El problema de la formalización purista también aparece reflejado en dicho trabajo cuando critica el establecimiento de requisitos en materia de documentación, educación y salud para la percepción del 20% de la AUH. Genera así un genuino “contra-sentido progresista”, siendo estos requisitos un fuerte aporte al mejoramiento de los niveles de vida de las clases subalternas. En primer lugar el impulso a la documentación es clave, no sólo para la percepción de la AUH sino para la detención de cualquier prestación estatal y derecho ciudadano, su aliciente es por tanto favorable a la inclusión y no a la exclusión. Más llamativa aún es la crítica a la exigencia de vacunación de los niños y de escolarización que realiza el mencionado estudio, ya que complementariamente al aporte económico que genera la AUH aparece en estos requisitos el

impulso al mejoramiento de la calidad de vida de los niños de las clases subalternas, regularizando condiciones mínimas de salud y educación. Esto no implica dejar de mantener una postura crítica con respecto a las políticas de salud y educación y la necesidad de aumento presupuestario, sino que remite a reconocer los visibles impactos en el corto plazo que han generado estos requisitos: aumento de la matrícula escolar 25% en 2010 y aumento en la inscripción en el seguro médico estatal Plan Nacer del 40%.

Sí rescatamos el espíritu de la propuesta de Lozano y Raffo que señala la necesidad de afectar crecientes recursos con el fin de terminar con la pobreza e indigencia en Argentina. También es nodal la preocupación manifestada en torno la inflación, que sigue representando hoy un mecanismo de transferencia de recursos de asalariados a capitalistas, que deprecia constantemente los ingresos de las clases subalternas. Con respecto a esto debe rescatarse que ya se ha manifestado la importancia de actualizar los montos de la AUH que alcanza en 2010 un incremento de un 22%, de 180\$ a 220\$ por menor y de 720\$ a 880\$ por hijo discapacitado.

Con respecto al punto de los impactos de la AUH, el mismo presenta serias dificultades para ser establecido con claridad y rigurosidad. Un factor destacado es la mejora de todos los indicadores sociales: reducción de la pobreza, indigencia y desigualdad. El problema se encuentra en evaluar su magnitud, ya que aun las cifras provistas y los trabajos de análisis sobre las mismas son limitados por la brevedad del tiempo transcurrido, la disponibilidad de información y, a su vez, por la problemática en torno a la pérdida de confianza en los índices de precios desarrollados por el INDEC. Según el trabajo desarrollado por el Ceil-piette, los indicadores de indigencia se reducen entre un 55 y un 70%, retornando a los mejores momentos de la historia argentina, la pobreza también se reduciría fuertemente y la desigualdad (medida en cuántas veces ganan más los ricos que los pobres) se reduce en más del 30% convirtiendo a Argentina en el país más igualitario de América Latina. Pero los resultados más auspiciosos son alcanzados con el uso de los índices cuestionados. En contraposición, el trabajo de Lozano y Raffo construye un indicador alternativo a partir de la Canasta Básica Total para una familia tipo que ubicaría la línea de pobreza en \$2.114,6, sosteniendo que sólo las familias que poseen un ingreso de \$1.826,60 lograrían salir de la pobreza obteniendo la transferencia promedio que realiza la AUH (aunque le trabajo comete la arbitrariedad de descontar el 20% sujeto a los criterios educativos y sanitarios), quedando en contrapunto con la canasta del INDEC valuada en \$1.150, que permitiría salir de la pobreza a los hogares que percibieran ingresos por \$860.

La AUH moviliza ingresos que representan el 0,6% del PBI convirtiéndose en el Plan que involucra mayores recursos en relación al producto de una economía de toda América Latina. Sin embargo, la incompatibilidad de la AUH con otros planes sociales genera una suplantación de

planes por ésta, implicando un menor desembolso de nuevos recursos hacia las clases subalternas que el publicitado oficialmente. Según Lozano y Raffo la sustitución de planes implicaría que sólo se habría avanzado a incorporar a 1,3 millones de menores, el 10% de la población de niños en Argentina. La sustitución de planes también implicaría que, de los \$8.400 millones previstos para el plan, el ahorro provisto por la sustitución de planes aportaría unos \$4.100 millones, siendo el desembolso de nuevos recursos unos \$4.300 millones.

Más allá de las controversias y sin tener elementos suficientes para evaluar el real alcance de la AUH, sin embargo podemos evaluar varios factores:

- En primer lugar, constituye la principal política vertida en el contexto de crisis mundial con una clara orientación hacia las clases subalternas y posee efectos positivos en sus condiciones de vida de forma inmediata.
- La medida trasciende su carácter económico en cuanto, por sus propios requisitos, impulsa el incremento de la matrícula escolar y el mejoramiento de las condiciones sanitarias.
- Representa una profundización de las políticas de ingresos inauguradas desde la presidencia de Néstor Kirchner orientadas a elevar los “pisos” de ingreso de las clases subalternas, y abre un mejor panorama para presionar por mover los “techos” en materia de distribución funcional y de salarios reales.
- Constituye un elemento clave en la conformación del “giro progresista” en tanto expresa en una acción política la estrategia de alianza con las clases subalternas profundizada después de la derrota, tanto en el “conflicto del campo” como a nivel electoral, que sufrió el oficialismo en 2008.

4. El lugar del conflicto en el “giro progresista”

Es necesario señalar que para comprender el “giro progresista” no se puede observar sólo las políticas económicas de forma aislada sino la dinámica conflictiva a partir de las cuales éstas se abren paso. Por un lado, este conjunto de medidas anti-crisis se va desarrollando con otras que inciden directamente sobre el campo de la lucha de clases a nivel local. En este plano podemos mencionar el vasto conflicto con el Grupo Clarín y los principales oligopolios mediáticos, a partir del impulso y sanción de la Ley de Medios n°26.522. Por otra parte, la confrontación se convierte en la estrategia de acumulación primordial, reacomodando fuerzas dominantes y subalternas pero sin vistas en el corto y mediano plazo de derrota definitiva o cooptación de uno de los adversarios. Esto genera un terreno fértil, tanto para el desarrollo del componente “herético” del peronismo dentro del oficialismo como para incrementar el debate público y la

disputa, en un proceso de conflictividad en el cual pueden desarrollarse las diversas expresiones políticas y sociales de las clases subalternas.

La Ley de Medios representa una iniciativa democratizadora que apunta a la desconcentración y favorece una mayor pluralidad de perspectivas ya que prevé la repartición de licencias en tres tercios: uno para privados, otro estatal y un tercero para organizaciones sin fines de lucro, que podría convertirse en una herramienta para las organizaciones del campo popular. Su contenido anti-monopólico, derivado de la limitación y regulación de licencias que promueve, ha recrudecido el conflicto que el oficialismo ya mantenía con los principales grupos económicos ligados a la comunicación, entre el que destaca el Grupo Clarín, tanto por ser el principal concentrador de medios a nivel nacional como por el decidido papel jugado en la confrontación. Dicho grupo había sido previamente afectado por la desprivatización y socialización de la emisión de fútbol, cuyo monopolio detentaba. El escenario se desarrolló entonces en una creciente polarización, donde los principales medios comenzaron a cumplir más explícitamente el papel de intelectual orgánico (en sentido gramsciano) del alineamiento de derecha, promoviendo las líneas de debate, habilitando y dando aire a diversas figuras de la oposición así como manteniendo la confrontación y directiva a través de sus líneas editoriales.

Es interesante resaltar que en este contexto aparecen dentro de la señal estatal y otros medios, voces disidentes que comienzan a promover una mirada crítica sobre la comunicación, algunos de los mismos aliándose explícitamente con el gobierno, pero cubriendo un espectro de pensamiento crítico que lo sobrepasa. Asimismo, se observa la profundización de la estrategia oficial de recuperar la confrontación en las calles y en las plazas para dar cauce a las políticas públicas. El avance de la confrontación gobierno-oposición de derecha, que expresan distintos proyectos sociales y alianza de clases, ligada el primero al neo-desarrollismo y el segundo a la reacción neoliberal, plantea una doble tensión: una que podríamos denominar restrictiva, y otra expansiva.

La *tensión restrictiva* se refiere a que se gesta una polarización que tiende a consolidar la reformulación del bipartidismo, desgastado en 2001, en dos nuevos polos de centro-izquierda y centro-derecha, ocupando el oficialismo el primero y la oposición conservadora el segundo, que dificulta la emergencia y desarrollo de opciones basadas en las clases subalternas con proyecciones más transformadoras que pudieran aportar en la conformación del proyecto de orientación socialista. Ésta es la encrucijada en la que se encuentran tanto el Nuevo Encuentro como Proyecto Sur, fuerzas que contienen organizaciones diversas del campo del progresismo y la izquierda, y que deben construir sus estrategias frente a un escenario político caracterizado por la complejidad y la polarización. Por un lado, el Nuevo Encuentro tiende a generar acuerdos

tácticos con el oficialismo en las medidas progresivas y buscar impulsar otras que no responden necesariamente a la estrategia oficial tales como la ley de Matrimonio homosexual, la profundización de la AUH a través de un proyecto de ley, la Ley de servicios financieros, entre otras. Por otro lado, Proyecto Sur procura capitalizar el perfil anti-kirchnerista, planteando una dura oposición al oficialismo, acumulando referencia política a través de los espacios provistos por los grupos económicos de la comunicación y manteniendo coordinación parlamentaria con el bloque de derecha. Al mismo tiempo ambas fuerzas buscan desarrollar sus lazos con los movimientos sociales a través de las distintas organizaciones y plantean la necesidad de gestar políticas profundas que habiliten un proceso de transformación social favorable a las clases subalternas. La tensión restrictiva se evidencia en las dificultades para generar una alternativa independiente de los bloques dominantes en conflicto a partir de la creciente polarización del escenario político.

La *tensión expansiva*, por su parte, implica la posibilidad desde el conjunto de organizaciones de las clases subalternas de promover mejoras, ya sea a través de políticas como de disputas de ingresos puntuales a través del conflicto, aprovechando el espacio abierto por la crisis inter-burguesa. Esta crisis está caracterizada por el fin del momento hegemónico alcanzado hacia 2006 con la estabilización y adhesión de un amplio espectro de fuerzas políticas y fracciones de clase, y el nuevo desarrollo del enfrentamiento al interior de las clases dominantes, entre sus elementos más progresistas dispuestos a aceptar algún grado de acuerdo y transferencias de recursos hacia las clases subalternas expresados en el “giro progresista” y las facciones más reaccionarias del capital junto a las corporaciones agrarias y los partidos de derecha. Este contexto genera un marco propicio para el desarrollo de otros núcleos de conflicto favorables a las clases subalternas, no necesariamente contenidos en la disputa entre el oficialismo y la oposición conservadora. Esto puede ser visto en el caso del matrimonio homosexual, que sin ser una propuesta del gobierno, e incluso encontrando resistencias al interior del mismo, logró abrirse paso confrontando a la derecha política, los medios y la iglesia católica. También se visualiza en los crecientes conflictos por aumentos salariales así como por la repartición de los recursos involucrados en los planes sociales y laborales. Este contexto también es favorecido por una amplia apertura al debate a partir del impulso emergente de democratización de la comunicación⁶.

⁶ Esta potencialidad expansiva del conflicto puede verse a tal punto que comienza a permear en el mismo oficialismo la discusión sobre la ganancia empresarial llegando a plasmarse en una propuesta de participación de los trabajadores sobre el 10% de las ganancias de las empresas en las que trabajan.

5. Conclusiones: rasgos, alcances y límites del neo-desarrollismo

Se gesta en Argentina un nuevo modelo de acumulación a partir de 2002, que expresa cambios en la correlación de fuerzas centrándose en la fracción productivo-exportadora del capital. Al mismo tiempo que el Estado comenzó a desplegar una serie de acciones “compensatorias” en busca de lograr adhesión y gobernabilidad. Se inició una fase expansiva de acumulación capitalista basada en una lógica productivo-exportadora, estructurada a partir de la exportación de materias primas y manufacturas de escaso valor agregado centradas en el procesamiento (con rasgos predatores) de los recursos naturales. Si bien se mantiene la regresividad en materia productiva, el nuevo tipo de cambio habilitó la recuperación de la producción industrial, y junto con el crecimiento de la construcción promovieron un modelo legitimado en base a la recuperación del empleo. Aún así, lejos de impulsarse una significativa redistribución del ingreso, el bajo costo laboral en condiciones de aumento de la productividad constituye una de las claves fundamentales de la ganancia empresaria.

El surgimiento de la crisis mundial profundizó un cúmulo de tensiones propias del modelo y amenazó con desestabilizarlo. En este contexto, el gobierno desplegó un conjunto de políticas que muestran la búsqueda de mantener tanto los pilares de estabilización del modelo post-convertibilidad (superávit fiscal y comercial), como el *status quo* establecido por el mismo. El oficialismo promueve un activo plan anti-crisis que confirma el carácter neo-desarrollista que busca imprimirse al modelo. Se observa un fuerte crecimiento del gasto público para sostener la demanda y estimular la actividad económica, claramente contrastante con los planes de ajustes impuestos por la Unión Europea a España y Grecia. Lejos de realizarse un nuevo “salvataje” al sector financiero, se estatizan las AFJP recuperando el Estado recursos claves en el financiamiento del plan anti-crisis. Se movilizan recursos hacia los sectores del capital productivo con el objetivo de mantener la actividad y el empleo. Se profundiza el rol del Estado, característico en la conformación del modelo, de constituir un actor fundamental en la implementación de mecanismos de transferencias de ingresos.

Estas medidas distancian al gobierno de los proyectos de carácter neoliberal, que aparecen encarnados en la oposición de derecha. Por otro lado, a diferencia de una perspectiva de cuño socialista, no se genera una masiva redistribución del ingreso ni impulsa decididamente formas alternativas de producción y poder popular.

El escenario político se convulsionó en 2008 con el “conflicto del campo” y la conformación de un alineamiento de derecha que logró derrotar al oficialismo en dicho conflicto y luego en las urnas. Este momento actuó como punto de inflexión en el cual el oficialismo procuró profundizar su proyecto en base a la alianza entre los agentes de la producción industrial así como en las

clases subalternas. Se da origen al “giro progresista” conformado por una estrategia de confrontación con los grupos de las clases dominantes aliados con el alineamiento de derecha y un conjunto de medidas favorables a las clases subalternas. Este escenario político, signado por el conflicto, plantea una doble tensión hacia las fuerzas del campo popular que buscan configurar un proyecto de orientación socialista: una tensión restrictiva ligada a la polarización entre oficialismo y oposición de derecha, que dificulta la emergencia de otras fuerzas por fuera de dichos espacios; y una tensión expansiva, en tanto las disputas al interior de las clases dominantes favorecen el desarrollo del conflicto e incluso iniciativas a nivel parlamentario favorables a las clases subalternas. De este modo aparece el debate y movilización en torno a políticas que no son necesariamente diseñadas por las fuerzas oficialistas (como el caso del matrimonio gay, elaborado por el Nuevo Encuentro) y cuya victoria, más allá de implicar o no acumulación para el propio gobierno, representan avances para el conjunto de las clases subalternas en el terreno de la lucha de clases, como lo es claramente el perfil anti-monopólico y democratizador de la Ley de Medios, la re-estatización de las AFJP y la AUH que mejora en un breve plazo las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de las clases subalternas.

El proyecto neo-desarrollista ha mostrado como alcance la posibilidad de impulsar un modelo de perfil productivo, con activas políticas de Estado que recupera la inversión pública y busca generar transferencias de ingresos para estabilizar la nueva correlación de fuerzas emergida post-2001. Este modelo permite reducir el desempleo y se complementa con diversas políticas de ingreso a partir de 2003 que elevan los “pisos” de vida de las clases subalternas. Sin embargo, podemos señalar algunos de sus límites:

- Límites estructurales, ligados a la fuerte extranjerización y concentración económica, que implica un sujeto dominante muy distinto a la “burguesía nacional” de los 70.
- La orientación exportadora de los grupos industriales predominantes, que ven al salario como un costo, lo cual aumenta las tensiones hacia la posibilidad de desarrollo del mercado interno basado en el consumo popular.
- La persistencia de estructura productiva regresiva y parcialmente desestructurada.
- La vulnerabilidad externa frente a las oscilaciones de los precios de los *commodities*.
- La cuestión de los recursos naturales, depredados por el perfil mismo del modelo.

Finalmente debemos señalar que no nos encontramos ante la emergencia de un bloque de poder con centralidad en las clases subalternas, pero que las disputas al interior de las clases dominantes y la estrategia oficial de buscar mayor apoyo en las mismas ante la pérdida de adhesiones entre distintos grupos de las clases dominantes, generan un escenario de disputa

interburguesa favorable a la proyección de los intereses subalternos, tanto al interior de las fuerzas de gobierno como al exterior de la misma. En este escenario parece cada vez más necesaria la conformación de un alineamiento que encarne de forma visible un proyecto de orientación socialista de modo de sostener los avances hasta ahora realizados e impulsar mayores modificaciones en la correlación de fuerzas a favor de las clases subalternas.

Bibliografía

- Aruguete, E. y R. Selva. 2009. “Reacciones de Política Económica frente a la crisis internacional” en Nota Técnica n°18. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- CEIL-PIETTE 2009. “Asignación Universal por Hijo en Argentina” en Nota Técnica n°23. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- FISyP. 2009. “Informe de coyuntura, primer trimestre 2009” en www.fisyp.org.ar/WEBFISYP/INFCOY.doc
- GT Economía Mundial. 2009. “Declaración sobre la crisis mundial”. CLACSO. <http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2009/nro365/clacso.html>
- Klitenik, Fabio. 2010. “Evolución reciente de los precios internacionales. Causas y respuestas políticas” en Nota Técnica n°27. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Lozano, C. 2008. “Una mirada sobre la coyuntura económico y social”. IEF-CTA. En http://www.aterosario.org.ar/IMG/article_PDF/article_252.pdf
- Lozano, C. y T. Raffo. 2009. “Bicentenario sin hambre. Evaluación del programa de asignación universal por hijo para la protección social” en <http://www.ingresociudadano.org/IDEP-CTA.pdf>
- Ortiz, Ricardo y Martín Schorr, 2009 “Crisis internacional y alternativas de reindustrialización en la Argentina”, ponencia, XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires.
- Schorr, M. y A. Wainer 2005. "Argentina: muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del 'modelo de los noventa' al del 'dólar alto'", *Realidad Económica* n°211, Buenos Aires.
- Varesi, Gastón. 2009a. “Empresas privatizadas y acciones estatales en el modelo post-convertibilidad, 2002-2007” Ponencia, XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires.
- Varesi, Gastón. 2009b. «Inflación, transferencias y distribución del ingreso en la Argentina post-convertibilidad. ¿Cómo se gestan y a quiénes benefician?» en *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, La Plata, en prensa.
- Varesi, Gastón. 2010. “El circuito productivo sojero argentino en el modelo post-convertibilidad. Una aproximación desde el enfoque de análisis regional” en *Cuadernos del CENDES*, UCV, Caracas, en prensa.